

hándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 15 de Octubre de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de México por D. Juan Vega y Alvarez, en representacion de la Señora Dª Josefa Iradi de Alegre, contra el acuerdo del Ayuntamiento de esta capital, en virtud del cual la Administracion de Rentas Municipal, usando de la facultad económico-coactiva, embargó la parte de la hacienda de Aragon, que posee y tiene como propia dicha Señora Iradi.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El Promotor dice: que habiendo el Juzgado conformádose con el pedimento anterior, mandó continuar el juicio de amparo sustanciándose en lo principal. Pedido el informe de la ley al C. Presidente del Ayuntamiento, lo ha rendido á su nombre el C. Abogado defensor de Beneficencia; reproduciendo el que antes produjo al tratarse el punto de la suspension, acompa-

ñando copias de lo adeudo por réditos hasta el año de 1868, de los diversos acuerdos del Gobierno del Distrito relativos á la transaccion, y del estenso dictámen que presentó á la junta de hacienda del Ayuntamiento el mes de Abril último, impugnando las propuestas de la Señora Carrillo para el pago de réditos, y para fraccionar la hacienda de Aragon dividiéndola en lotes. En el presente juicio de amparo, se agitan diversas cuestiones legales que pueden deducirse en vía de amparo, y al Juzgado sin preocuparlas, solo toca resolver si existe ó no la violacion de los artículos 16 y 17 de la Constitucion que han sido invocados por el quejoso.

Es un hecho que el fondo de parcialidades primitivamente y hoy la corporacion municipal, tiene derecho á los capitales que á aquel pertenecian, y en consecuencia la habilidad para cobrar réditos, y esta no la niegan ni la Señora Carrillo, ni el Señor Vega en representacion de la Señora Alegre, supuesto que la queja únicamente es, que el Ayuntamiento ejercita en su contra el uso de la facultad económico-coactiva no siendo su deudora: lo será ó no segun se declare subsistente ó insubsistente la transaccion aprobada por el Ayuntamiento el mes de Abril de 1871; mas su validez como dije antes, no puede ventilarse en el presente juicio, y se resolverá, ó por los tribunales del fuero comun en el que corresponda, ó en el que se tenga al contenderse sobre el embargo practicado por el Ayuntamiento en uso de la facultad económico-coactiva. La ley de 20 de Enero de 1837 que determina el uso de esta facultad, previene: que practicado el embargo, habiendo oposicion, se remita el expediente al Juzgado de Distrito, para que ante él continuen los procedimientos; pues bien, practicado este por el Ayuntamiento, ha concluido en el caso, y toca al Juzgado continuar las diligencias.

Por lo expuesto, existiendo la violacion de las garantías reclamadas en el sentido

indicado, puede el Juzgado declarar: que la Justicia federal ampara y protege á la Señora Doña Josefa Iradi de Alegre, contra los procedimientos ulteriores del Ayuntamiento, despues de practicado el embargo. México, Junio 22 de 1873.—*Herrera Campos.*

Es copia que certifico.—*F. de A. Osorno,* secretario.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

México, Agosto 22 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por Don Juan Vega y Alvarez, en representacion de la Señora Doña Josefa Iradi de Alegre contra el acuerdo del Ayuntamiento de esta capital, en virtud del cual la Administracion de Rentas Municipales, usando de la facultad económico-coactiva, embargó la parte de la hacienda de Aragon, que posee y tiene como propia dicha Señora Iradi, quejándose de que con tal acuerdo y al ejecutivo, se han violado las garantías consignadas en los artículos 16 y 17 de la carta fundamental de la República; los documentos presentados por el quejoso; los informes rendidos por el Ayuntamiento; lo alegado por Vega; lo pedido por el Promotor fiscal y demas constancias de autos á que en lo necesario me refiero.

Considerando; Primero: que es un hecho puesto fuera de duda, que consta en el certificado de fojas 18 á la 21, y reconoce el C. defensor de Beneficencia en el informe que rindió á nombre de la corporacion Municipal, que ésta, previa audiencia de su síndico, aprobó por acuerdo de 25 de Agosto de 1871, una transaccion con la Señora Doña Petra Carrillo de Orozco, propietaria de la hacienda de Aragon, en cuya virtud quedó reducido á treinta y nueve mil setecientos diez y siete pesos setenta y siete centavos el capital que esa finca reconocia á los fondos de Beneficencia pública, quedó aprobado el fraccionamiento de la misma finca y seña-

ladamente el contrato que tenian celebrado las Señoras Carrillo de Orozco é Iradi de Alegre, segun el cual, la primera entregó á la segunda libre de todo gravámen á favor del Ayuntamiento, una parte de la hacienda de Aragon, cuya transaccion fué aprobada por el Gobierno del Distrito.

Segundo: que por virtud de esa misma transaccion, la Señora Iradi de Alegre adquirió el dominio pleno y libre de todo gravámen municipal, de la fraccion de la finca que le entregó la Señora Carrillo de Orozco, y el Ayuntamiento por su parte se comprometió á no cobrar de esa misma fraccion los réditos que por su capital se debieran, ni tampoco parte alguna del mismo, estableciendo así su incompetencia para proceder contra la repetida fraccion, ya respecto del capital ó ya de los réditos, mientras subsistiera la transaccion referida.

Tercero: que para nulificar esta, es incompetente el Ayuntamiento de por sí, y tal nulificacion, resintiéndola alguna de las partes, solamente puede decretarse en juicio por la autoridad respectiva.

Cuarto: que supuestas las anteriores consideraciones, resultar que sea cual fuere la amplitud que legalmente deba darse á la facultad económico-coactiva que el Ayuntamiento tiene para hacer efectivos los adeudos á favor de la Beneficencia pública, ella no puede comprender el caso en cuestion, en el cual el mismo Ayuntamiento es incompetente para usar aquella, supuesto que se refiere á adeudos ciertos é indultados, y la existencia de la transaccion aprobada en 25 de Agosto de 1871, quita á la Señora Iradi de Alegre y á la fraccion de la hacienda de Aragon que posee, el carácter de deudores indudables.

Por lo expuesto, y con arreglo á lo prevenido en los artículos 16, 17 y fraccion 1ª del artículo 101 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, debia declarar y declaró: que la Justicia de la Union ampara y protege á la Señora Doña Josefa Iradi de Alegre, contra el acuerdo del Ayun-

tamiento de esta capital, que mandó proceder ejecutivamente contra la hacienda de Aragon, en la parte en que tal acuerdo fué ejecutado embargando la fraccion de la misma finca que posee como propietaria dicha Señora Iradi de Alegre. Hágase saber y publicada esta sentencia en la forma acostumbrada, remítase con las actuaciones á la Corte Suprema de Justicia de la Nacion. El C. Juez de Distrito así lo mandó y firmó. Doy fé—*José A. Bucheli.*—*F. de A. Osorno*, secretario.

Es copia que certifico. *F. de A. Osorno*, secretario.

le Distrito; que de esto infiere el J. de Distrito en su expresado fa-

Señora Iradi de Alegre adquirió pleno y libre de todo gravámen, de la fraccion de la finca que a Señora Carrillo, y que el Ayuntamiento su parte, se comprometió á no esa misma fraccion, los réditos capital se debieran, ni tampoco na del mismo capital, estableciendo incompetencia para proceder contra dicha fraccion.

ando: que por los documentos de quejosa presentó para fundar su demanda, aparece en efecto, que el Ayuntamiento cabildo de 25 de Agosto de 1871, aprobó un dictámen de la misma fecha, en el que se declara la aprobación de una liquidación por el mismo síndico, en que se reduce el valor de la hacienda de Aragon, y se consulta la aprobación del Ayuntamiento de la finca, expresándose que debe hacerse de los terrenos que pertenecen al Ayuntamiento el pago de los réditos, para lo que los interesados presenten el plano de la finca y de division, haciéndose el valor de las fracciones por peritos, y asegurando el pago de los réditos á la Tesorería; por último, en el expresado dictámen, res-

Doña Petra Carrillo de Orozco, en cuya virtud quedó reducido á treinta y nueve mil setecientos diez y siete pesos setenta y siete centavos, el capital que la hacienda de Aragon reconocía á los fondos de beneficencia pública; quedó aprobado el fraccionamiento de la misma finca, y señaladamente el contrato que tenían celebrado las Señoras Carrillo de Orozco ó Iradi de Alegre, segun el cual la primera entregó á la segunda libre de todo gravámen; á favor del Ayuntamiento, una parte de la hacienda de Aragon, todo lo que fué aprobado por el

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 15 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por Don Juan Vega y Alvarez, en representación de D^a Josefa Iradi de Alegre, contra la Administracion de Rentas Municipales del Ayuntamiento de esta Capital, en cuya virtud se embargaron á dicha Señora los terrenos que posee y formaron parte de la hacienda de Aragon, de la propiedad de Doña Petra Carrillo de Orozco, quien reconoce sobre dicha finca el valor de la misma, conforme á las prescripciones de la ley de 24 de Junio de 1856; los alegatos de las partes; los documentos presentados en apoyo de sus encontradas pretensiones, y la sentencia que en 22 de Agosto último pronunció el C. Juez 1^o de Distrito, amparando al quejoso contra el acuerdo del Ayuntamiento, que mandó proceder ejecutivamente contra la hacienda de Aragon, en la parte en que tal acuerdo fué ejecutado, embargando la fraccion de la misma finca que posee como propietaria dicha Señora Iradi de Alegre.

Considerando: que el fallo que se revisa, se funda principalmente, en que el Ayuntamiento de 1871, previa audiencia de su síndico, aprobó una transaccion con la Señora

Gobierno.

C. Juez 1^o de Distrito, que le entregó el documento municipal que le entregó el Ayuntamiento para cobrar de la hacienda de Aragon, que por su parte alguna de la hacienda de Aragon, tra la rep-

Considerando: que la parte demandante en su demanda de 1861, aprueba del síndico que se convalida la forma de reducir el adeudo de la hacienda de Aragon del fraccionamiento de la finca, cuyo valor de sus partes deben su proyecto de las fracciones compradas satisfechas se consult

pecto de la venta hecha á la Señora Iradi, que no perjudicándose con ella los derechos de la municipalidad, y debiendo considerarse como parte del proyecto de fraccionamiento propuesto por los dueños de la hacienda, se ratifique desde luego dicha venta.

Considerando: que del tenor expreso del dictámen del síndico 2º, se infiere con toda evidencia, que se consultó la aprobacion ó ratificacion de la venta de que se trata, bajo el concepto de que con ella no se perjudicaban los derechos del Ayuntamiento; que esa venta debia considerarse como parte del fraccionamiento propuesto, y que este debia hacerse de modo que los compradores aseguraran el pago de los réditos á entera satisfaccion de la Tesoreria municipal.

Considerando: que en este concepto es violento deducir, que el Ayuntamiento consintió en no cobrar á la Señora Iradi parte alguna de lo que la hacienda de Aragon debia, tanto de capital como de réditos, y esto por una fraccion de la finca valiosa en sesenta mil pesos, que fué el precio en que la Señora Orozco vendió á la Señora Iradi la referida fraccion, y que no hay razon alguna para presumir que está fuera la intencion del Ayuntamiento, sobre todo, si se tiene en cuenta que los adjudicatarios de la hacienda de Aragon quedaron reconociendo sobre la finca la totalidad del precio de adjudicacion, y por lo mismo, que consentir en la liberacion de una parte considerable de la finca, sería lo mismo que consentir en disminuir la garantía hipotecaria, con la que se perjudicarian notablemente los derechos del Ayuntamiento, siendo así que se consultó la ratificacion de la venta, porque en nada se perjudicaban los derechos de la municipalidad, segun expuso en su dictámen el C. síndico 2º.

Considerando: que aun quando se estableciera que el Ayuntamiento en su acuerdo de 25 de Agosto, consintió de una manera terminante y expresa, en que la fraccion vendida á la Señora Iradi en sesenta

mil pesos, quedara libre de todo gravámen y responsabilidad por el precio de la adjudicacion, tanto respecto del capital como de los réditos, sería necesario esclarecer, si ese acuerdo es de tal manera obligatorio para el Ayuntamiento, que mientras que no obtenga en juicio la declaracion de su nulidad ó de su insubsistencia por causa de rescision, no puede ejecutar accion alguna sobre la fraccion vendida procedente de la hipoteca á que quedó afecta toda la finca; que á este respecto hay que considerar; 1º: que tratándose de bienes de beneficencia cuya administracion está confiada al Ayuntamiento, esto lo desempeña con las mismas condiciones y limitaciones que la tuvo la extinguida Direccion general, y por lo mismo, las resoluciones del Ayuntamiento con relacion á los bienes que forman sus fondos, deben someterse á la aprobacion del Gobierno general, por conducto del Ministerio de Gobernacion, y no al Gobierno del Distrito como en los negocios comunes del mismo Ayuntamiento, decreto de 5 de Mayo de 1871; 2º: que no hay constancia alguna de que el Supremo Gobierno haya dado su aprobacion al acuerdo de que se trata, pues respecto de este punto, solo aparece, que dicho acuerdo fué aprobado por el Gobierno del Distrito, y esto no en comunicacion suscrita por esta autoridad, sino en la que suscribe el secretario del mismo Gobierno, "por ocupacion del C. Gobernador," sin que haya ley alguna que autorice esta práctica, y menos en negocios de la gravedad é importancia del presente; 3º: que aun suponiendo debidamente aprobado dicho acuerdo, aprobacion por otra parte necesaria, pues los establecimientos públicos no pueden transigir sino con la aprobacion del Gobierno, segun lo determina el artículo 3298 del Código civil, y ademas solo pueden transigir los que tienen la libre facultad de enagenar sus bienes y derechos, conforme al artículo 3294, y es evidente que el Ayuntamiento no tiene tal facultad respecto de los bienes y derechos de la beneficencia; para

dar al mismo acuerdo el carácter y fuerza legal de una transacción, era necesario el otorgamiento de una escritura pública, y que esta se registrara en la forma debida según lo previene el artículo 3341 del mismo Código civil, y no hay constancia de que así se haya verificado; 4º: que aun cuando la supuesta transacción se hubiera elevado á instrumento público, haciéndose en el Registro la inscripción correspondiente, mientras no se liberase la hipoteca primitiva que afecta toda la finca y cada una de sus partes, esa hipoteca debe surtir sus efectos, según lo previene el artículo 2037, y uno de esos efectos consiste en que el acreedor hipotecario pueda ejercitar su acción contra cualquier poseedor de la finca ó de alguna de sus partes, pues los bienes hipotecados quedan sujetos al gravamen impuesto, aunque pasen á manos de un tercer poseedor, conforme al artículo 1941.

Considerando: que según lo que va expuesto, está espedida la acción del Ayuntamiento, por lo menos para asegurar el pago de lo que adeuda la hacienda de Aragon, salvo en todo caso lo que los tribunales resuelvan acerca del valor del acuerdo de 25 de Agosto de 1871, de las obligaciones que impone al Ayuntamiento y de la estension legal de esas mismas obligaciones.

Por las consideraciones y fundamentos legales expuestos, la Suprema Corte de Justicia revoca la sentencia pronunciada por el C. Juez 1º de Distrito en 22 de Agosto último, y se declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Juan Vega y Alvarez, representante de la Señora Iradiño Alegre, contra el acuerdo del Ayuntamiento de esta Capital que mandó proceder ejecutivamente contra la hacienda de Aragon, en la en parte que tal acuerdo fué ejecutado embargando la fraccion de la misma finca que posee dicha Señora, mientras el procedimiento de la Tesoreria municipal se limita á asegurar los derechos del municipio en los términos que lo permite el uso

legítimo de las facultades económico-coactivas.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia. México, Octubre 18 de 1873.
—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido por Gustavo Levy, á virtud de reputar violadas en su persona las garantías individuales que otorgan los artículos 19, 20 y 21 de la Constitucion, con el hecho de determinarse su expulsion de la República como extranjero pernicioso.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

México, Agosto 30 de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por Gustavo Levy, á virtud de reputar violadas en su persona las garantías individuales que otorgan los artículos 19, 20 y 21 de la Constitucion, con el hecho de determinarse su expulsion de la República como extranjero pernicioso; visto el informe de la autoridad respectiva; el auto por el que el Juzgado negó la suspension del acto solicitado por el quejoso; lo pedido por la parte Físcal; y visto en fin lo que verse debía, y Considerando; 1º: que tanto por la razon general ó espiritual de la ley regla-